

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 29º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-20904-2023
CARATULADO : RUBILAR/CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO (DS 1036 - LOTE 74-A)

Santiago, veintiséis de Abril de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Hugo Gutiérrez Gálvez, Ramiro Ignacio Gutiérrez Acuña y Yolanda Berena Milanca Nahuelhuaique, abogados, domiciliados en Paseo Bulnes N° 216, oficina 901, Santiago, en representación de Ricardo Santiago Rubilar Bascur, pensionado, domiciliado en Bartolomé Vivar N° 1120, La Florida, interponen demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso N° 4, Santiago.

Exponen que su representado fue detenido en abril de 1974, siendo mantenido en prisión hasta junio de 1975, debiendo continuar firmando hasta el año 1976. Asimismo, que a la fecha de ocurrencia de los hechos tenía 18 años, siendo el menor de su familia, destacando que no era militante.

Explican que concurrió a presentarse al Regimiento de Caballería Húsares de la Muerte en Angol para inscribirse y realizar el Servicio Militar, frente a lo cual le dieron una lista de materiales y le dijeron que volviera el día lunes. Señalan que al regresar el sr. Rubilar, sin mediar ninguna explicación, fue detenido y llevado a una celda, quedando a cargo del guardia del Regimiento.

Refieren que fue sacado varias veces de allí y llevado a caballerizas, donde fue interrogado, amarrado a una silla y brutalmente golpeado, especialmente en la cabeza, estómago y oídos. Luego de las golpizas era llevado a su celda, situación que se repitió por casi 4 días, según describe su representado.

Denuncian que producto de las golpizas el demandante perdió parte de sus dientes delanteros y le reventaron sus oídos, terminando las sesiones de torturas



«RIT»

Foja: 1

con su cabeza y boca sangrando. Transcurridos esos 4 días, indican que fue enviado a la cárcel pública de Lonquimay, quedando incomunicado mientras se recuperaba de los golpes, para ser luego llevado ante el Fiscal Militar.

Indican que la Corte Marcial lo habría sentenciado a 120 días de cárcel, y que al salir ya llevaba el doble de la pena impuesta. Hacen presente que cuando la familia volvió a ver al sr. Rubilar, lo encontraron cambiado y no solo físicamente, sino que también en el aspecto psicológico.

Refieren que se había vuelto retraído y distante, no quería salir de su casa por miedo a ser detenido nuevamente, no quería ver a nadie y no podía dormir. Agregan que tiempo después se arrancó de su casa y lo encontraron viviendo en la calle.

Siguen relatando que esta situación se mantendría por varios años, y que el doctor que en ese tiempo lo atendió habría señalado un deterioro mental causado por los graves abusos a que fue sometido, sufriendo varios episodios depresivos severos y una sordera que actualmente se constituye en una hipoacusia del 75%.

Acto seguido, se refieren al reconocimiento del Estado de Chile de los hechos descritos, a través del Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura "Comisión Valech", remarcando que Ricardo Santiago Rubilar Bascur se encuentra calificado como víctima de prisión política y torturas, según consta en el número 21.683 del listado.

Abordan el contexto histórico del período 1973-1990 y la función de la referida Comisión, que propició el reconocimiento del Estado de Chile a las víctimas de tortura por agentes del Estado o personas a su servicio.

Estiman que los hechos narrados dan clara cuenta de la magnitud de los daños físicos, emocionales y materiales que perdurarían hasta hoy, ya que el sr. Rubilar Bascur no solo sufrió prisión política y tortura (detenido en abril de 1974 hasta junio de 1975, debiendo luego firmar hasta el año 1976), sino que a corta edad su proyecto de vida se vio truncado.

Señalan que todos sus hermanos pudieron desarrollar una vida plena, titulándose de diversas profesiones, sin embargo, el demandante, producto de los traumas sufridos, cambió severamente su comportamiento, volviéndose hosco, temeroso, dejando de lado sus amigos y estudios. Además, cuentan que al huir de casa se mantuvo en estado de vagancia por algunos años, terminando con un estado de salud muy precario en la actualidad, con una hipoacusia de 75%.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Sostienen que sería amplia la doctrina que de manera consistente señala que el efecto de la represión política traspasa las generaciones y que el daño perdura en el tiempo. Agregan que los diagnósticos médicos y psicológicos no pueden dar cuenta en su total magnitud de los daños que por décadas han padecido las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y que son incalculables.

Aluden a los requisitos necesarios para indemnizar: 1.- Existencia de daño moral producto de las torturas sufridas. 2.- La acción u omisión emanada de un órgano del Estado. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fueron agentes de un órgano de la Administración los que actuaron (agentes del Estado) y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. 3.- Nexos causal. El daño a la víctima proviene, justamente, de la perpetración del delito civil. 4.- Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

En cuanto a los fundamentos de derecho, plantean también que se trataría de un delito de lesa humanidad, lo que llevaría aparejado la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, de la acción civil.

Se remiten a la normativa internacional y nacional para efectos de fijar la responsabilidad del Estado, argumentando que en el ámbito nacional ésta tendría un origen extracontractual, siendo el principio de legalidad y de responsabilidad patrimonial de los entes públicos la base del Derecho Administrativo. Añaden que los crímenes de lesa humanidad tienen su origen en políticas estatales o de funcionarios públicos, lo que hace que la responsabilidad por los daños sea atribuible a falta de servicio, que obliga al Estado a responder por los perjuicios causados por los actos u omisiones de sus agentes.

Esgrimen que lo anterior es debido al hecho propio del Estado, al haber actuado por sus órganos cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas, siendo el artículo 42 de la Ley N° 18.575 la norma que determina la responsabilidad patrimonial por la función administrativa, en caso de falta de servicio, que analizan.

En cuanto a la relación de causalidad de la lesión con la actuación, postulan que ésta supone que se ocasione el daño, lo cual estaría ampliamente acreditado, a través del certificado del INDH, en el cual se reconoce a su representado como víctima calificada de Prisión Política y Torturas por el Estado de Chile.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Agregan que la falta de servicio es un criterio de atribución de responsabilidad que difiere del Derecho Civil, porque su objeto es equilibrar los intereses públicos y privados, pero permitiendo que los privados frente a una actuación administrativa deficiente, puedan exigir al Estado ser reparados por los daños inferidos por un funcionamiento anormal o defectuoso del servicio.

Asimismo, reparan acerca de la responsabilidad del Estado a la luz de la normativa constitucional de las cartas de 1925 y 1980, destacando que la norma especial ha de aplicarse por sobre la general, cuando se ajuste mejor al hecho concreto.

Hacen presente, por otra parte, que la jurisprudencia relativa a responsabilidad del Estado en casos de delitos de lesa humanidad sería uniforme, ya que la posición mayoritaria sería conteste con la responsabilidad extracontractual del Estado frente a estos crímenes, sancionándolos conforme a las reglas del Derecho Internacional. Citan pasajes de sentencias para validar su postura.

En cuanto a la responsabilidad del Estado a nivel de normativa internacional, manifiestan que la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ha sido consagrada como uno de los principios del Derecho Internacional Público, que tendría carácter vinculante como principio del Derecho Internacional y, por tanto, aplicable como fuente de obligaciones.

Postulan que el Estado de Chile al suscribir tratados y convenciones a nivel internacional, haciéndose parte de dicha comunidad, se obliga a respetar la costumbre internacional y sus principios generales, incorporando de forma progresiva la obligación general de respeto a los derechos esenciales de la persona.

Respecto de la aplicación del Derecho Internacional al caso concreto, repiten que su representado ha sido calificado como víctima de prisión política y torturas, con el N° 21.683 del listado de la Comisión Política y Tortura Valech I, delitos considerados por el Derecho Internacional como de lesa humanidad, enfatizando que el Estado de Chile tiene el deber de dar cumplimiento a los tratados y principios internacionales.

Señalan, por otra parte, que resultaría contrario a derecho tratar de aplicar normas de derecho privado a delitos de lesa humanidad, porque el Estado chileno ha incorporado a nuestra legislación los tratados y principios que rigen el Derecho



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Internacional de los Derechos Humanos. Argumentan que por esta razón, no serían aplicables las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

En cuanto al daño moral y el monto de la indemnización, aducen que la acción civil entablada en contra del Estado de Chile busca obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados al sr. Rubilar Bascur.

Dicho lo cual, sostienen que las prestaciones establecidas en la Ley N° 19.123 no deben entenderse que pugnan con la pretensión de su representado, criterio que se habría mantenido.

En cuanto al monto, recuerdan que la Corte Internacional de Justicia habría señalado que, en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido el ilícito. A continuación detallan una serie de medidas que la Corte habría planteado como parte de la reparación del daño emergente.

Hacen presente que en fallos recientes habría comenzado a presumirse la efectividad de los gastos y que el criterio para su valorización sería el de la equidad.

Plantean que todo lo anterior debe aplicarse al momento de establecer un monto de indemnización, siempre desde la perspectiva de la víctima, que en el caso del daño extrapatrimonial se expresa no solo en el dolor, sufrimiento y angustia ante una situación injusta e ilegítima, sino que por la pérdida de su familia, al estar casi un año separados, con todo lo que ello conlleva.

Piden se condene al Fisco de Chile al pago de \$200.000.000, por concepto de daño extrapatrimonial, como consecuencia directa de la detención, prisión política y torturas de que fue objeto su representado, por obra de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que el Tribunal determine en justicia, más reajustes, intereses y costas.

Con fecha 5 de enero de 2024 se notifica la demanda.

Con fecha 26 de enero de 2024 el Fisco contesta la demanda.

Plantea en primer lugar la excepción de cosa juzgada, en conformidad a los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil, indicando que ya existe sentencia definitiva ejecutoriada en la materia respecto del demandante.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Explica que el actor ya ejerció una acción por estos mismos hechos, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada, precisando que el sr. Rubilar Barcur demandó al Fisco por indemnización de perjuicios por la detención ilegal y apremios que habría sufrido, en la causa caratulada: “Aguilar González Orlando y otros con Estado de Chile”, de la cual conoció el 5° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-9405-2005, dictándose sentencia definitiva que rechazó la demanda por la prescripción de la acción de indemnización de perjuicios, resolución confirmada por la Iltma. Corte de apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra.

Sostiene que, en la especie, se trataría de las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que el actor demandó al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido a manos de agentes del Estado.

Se refiere a la cosa juzgada, en el sentido de constituir la expresión máxima de la preclusión, o sea, el cierre definitivo de la etapa que resuelve de una vez y para siempre el conflicto, erigiéndose en el objeto final del procedimiento.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 20.520-2018, de fecha 14 de noviembre de 2019, en relación a la procedencia de la cosa juzgada en causas de Derechos Humanos.

Afirma que la correcta incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ordenamiento interno no pasa por crear una especie de recurso de inaplicabilidad del precepto legal, ya no por inconstitucional, sino que por una pretendida contrariedad con el Derecho Internacional, siendo que lo adecuado sería observar el asunto a la luz de las normas en juego y compatibilizar los diversos ordenamientos sin sacrificar uno por los supuestos mandatos del otro.

Indica en dicho contexto que para el Derecho Internacional la cosa juzgada también es una institución fundamental, pese a que no hay en los instrumentos internacionales interamericanos un reconocimiento expreso, sin embargo, su configuración jurídica se habría ido consolidando, tanto así que se reconocería que las sentencias de tribunales internacionales gozan de “cosa juzgada internacional”, lo que implica aceptar que no solo los sistemas jurídicos domésticos se levantan sobre la seguridad jurídica que entrega la cosa juzgada, sino que también el de las cortes internacionales.

Acto seguido se refiere a la “cosa juzgada fraudulenta” y señala que en el concepto desarrollado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

misma aplica solo a la jurisdicción criminal y no a la civil. Además, plantea que la Excma. Corte Suprema, enfrentada a sentencias de cortes internacionales, habría reconocido el valor de cosa juzgada, citando para cerrar este acápite el artículo 76 de la Constitución Política de la República, argumentando que los Tribunales no pueden "revivir procesos fenecidos".

En subsidio, opone la excepción de reparación integral y la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante, reflexiona acerca del marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Asimismo, que una vez asumida esta idea resarcitoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2019, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936 como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); b) bonos: la suma de \$41.910.643.367 asignada por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737 por la ya referida Ley N° 19.992; c) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N° 9.123; y, d) bono extraordinario (Ley N° 20.874) por la suma de \$ 23.388.490.737. En consecuencia, al mes de diciembre de 2019 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Luego de referirse a las otras formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de reparación satisfactiva, por haber sido indemnizada la demandante.

A continuación, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención ilegal y tortura que sufrió la demandante, se basa en hechos ocurridos a partir de abril del año 1974. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 5 de enero de 2024, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Por último, plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N° 19.234 y 19.992.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 5 de febrero de 2024 la parte demandante evacua la réplica.

Hacen presente que el Fisco no discutió ninguno de los hechos relatados en la demanda, referidos al secuestro, detención ilegal, torturas y daños sufridos, ni los antecedentes que el Estado de Chile tuvo a la vista para calificar al sr. Rubilar Bascur como víctima.

Reiteran los hechos narrados en la demanda y las afectaciones padecidas, señalando que han transcurrido 50 años en que su representado ha tenido que vivir con los daños irreparables causados.

Se refieren a la excepción de cosa juzgada y a los argumentos alegados por el Fisco, antes de señalar que ha sido el mismo Estado de Chile el que voluntariamente ratificó, aprobó y publicó la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante el cual se somete no solo a las normas de la referida Convención, sino que, a su vez, aceptaría la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la interpretación y aplicación de las normas en la materia.

Señalan que sería paradójico que después de dichos reconocimientos sea el mismo Estado el que alegue la cosa juzgada en el caso que nos convoca. Reparar, además, acerca de la convencionalidad de control, junto a la reparación del perjuicio en el sistema interamericano de los Derechos Humanos.

Argumentan que cuando el demandado expone que no puede dejarse sin aplicación el derecho interno por aplicar el derecho internacional, no se hace cargo de que éste no es un mecanismo arbitrario, insurgente o usurpador, sino que una acción que nace de la Convención Interamericana y que solo se aplica en cierto tipo de casos, no siendo una violación a ninguna norma interna, desde que el propio Estado se hizo parte en ella.

Concluyen este acápite indicando que la demanda de la causa Rol C-9405-2005 del 5° Juzgado Civil de Santiago, prácticamente no expone los hechos vividos por el demandante, cosa muy distinta a lo que se hace en esta demanda.

Por otra parte, respecto a la excepción de reparación integral y la improcedencia de la indemnización por haber ya sido indemnizado el demandante, señalan que los tres tipos de compensaciones invocadas por la contraria resultan insostenibles frente a los hechos expuestos en la demanda, ya que no debe entenderse que las prestaciones establecidas en estas leyes pugnan con la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

pretensión indemnizatoria presentada, por ser la misma Corte la que habría señalado en reiteradas ocasiones que estas leyes fueron creadas de forma general, sin que pueda presumirse que el Estado ha pretendido con ellas una reparación íntegra del daño causado.

Hacen presente que de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, estas medidas tienen solamente una naturaleza asistencial, mas no reparatoria, hecho que estaría apoyado por diversa jurisprudencia nacional. Reiteran lo reseñado en cuanto a la reparación del daño en el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, sostienen que la contraria yerra en la aplicación de la prescripción civil de las acciones para hacer efectiva la responsabilidad del Estado. Exponen que por la naturaleza del delito, en cuya acción se funda la presente demanda, en que el ilícito de torturas y tratos degradantes e inhumanos fue reconocido por el Estado y se enmarca en los delitos de lesa humanidad, las acciones son imprescriptibles.

Entienden que sería imposible argumentar que la acción penal es imprescriptible y al mismo tiempo que la acción civil que deriva del mismo hecho punible no lo es. Citan jurisprudencia nacional relativa a la prescripción.

En cuanto a las alegaciones respecto a los daños y la cuantía de la indemnización reclamada, plantean que la defensa del Fisco se circunscribió a la fijación de la indemnización por daño moral, a que se debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y a guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, así como a la improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Sostienen que, en este sentido, lo reclamado fue \$200.000.000 como pretensión completa, por el daño material e inmaterial y que en subsidio se ha señalado “o bien lo que esta judicatura determine en justicia”.

Reiteran sus alegaciones en lo referido a los montos ya recibidos y, por otro lado, que se pueden citar casos emblemáticos donde se han fijado indemnizaciones de \$150.000.000.

Finalmente, en cuanto a la improcedencia del pago de reajustes e intereses, señalan que esta solicitud atiende a la extensión en el tiempo que puede tener el juicio, no obstante ser los Tribunales los llamados a determinar cuándo se reajustarán y devengarán los montos fijados.

Con fecha 13 de febrero de 2024 el Fisco evacua la réplica.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

En su presentación ratifica lo expresado en la contestación, refiriéndose particularmente a la excepción de cosa juzgada.

Mantiene que el demandante pretende restar eficacia absoluta y autoridad a la sentencia ejecutoriada dictada en un procedimiento anterior y obtener en un nuevo juicio un pronunciamiento favorable, concurriendo en ambas causas identidad legal de personas, cosa pedida y causa de pedir, lo que resultaría del todo improcedente, sin perjuicio de las motivaciones que indica el actor, pues el mandato de una sentencia, una vez firme, no puede ser modificado o dejado sin efecto, salvo casos muy excepcionales, como el recurso de revisión en materia penal, cuyo no es el caso.

Agrega que reconocer lo señalado por el demandante significaría ignorar la autoridad de los fallos que la Excma. Corte Suprema ha dictado en esta materia, desconociendo el valor jurídico de sus sentencias y, en definitiva, atentando en contra de la certeza jurídica.

En cuanto a la excepción de reparación ingregal, sostiene que el daño ya ha sido indemnizado y reitera sus argumentos.

En cuanto a la excepción de prescripción, indica la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos Rol N° 10.665-2011, que citó en su contestación, y agrega que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas de prescripción.

Concluye citando la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 16 de marzo de 2016.

Con fecha 14 de febrero de 2024 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 22 de abril de 2024 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta, respecto de la detención ilegal, prisión y torturas sufridas por Ricardo Santiago Rubilar Bascur, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “Régimen Militar” o simplemente “La Dictadura”, son hechos no controvertidos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

En línea con lo anterior, no se rebate que por esos motivos el actor fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, asignándole el número 21.683.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que Ricardo Santiago Rubilar Bascur fue víctima de detención ilegal, prisión y torturas a partir de abril de 1974 y *por más de un año*, siendo liberado en junio de 1975, todo producto de la acción de agentes del Estado, siendo dicho acto constitutivo de un crimen de lesa humanidad.

SEGUNDO: Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió la siguiente prueba.

Folio 1.

1.- Copia de certificado de nacimiento de Ricardo Santiago Rubilar Bascur, RUN. N° 7.490.711-3, fecha de nacimiento 26 de diciembre de 1955, emitido el 23 de noviembre de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

2.- Copia de documento denominado: “Informe Psicológico – Evaluación de Daños Asociados a la Violencia Política”, que aparece emitido por CODEPU – Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, respecto de Ricardo Santiago Rubilar Bascur, cuya evaluación se consigna fue llevada a cabo el 5 de octubre de 2023.

Se aprecia un relato de los hechos denunciados por el demandante, en términos similares a los de la demanda, pero en este documento se indica que el motivo de la detención fue principalmente para ser interrogado respecto de su hermano.

Señala, además, que estuvo 4 días en el Regimiento, siendo posteriormente trasladado a la cárcel pública de Lonquimay, donde permaneció por cerca de 4 meses, hasta que la Corte Marcial lo condena a 120 días de presidio. Dice que después le fue otorgada la libertad, con firma mensual, hasta emigrar a Santiago en el año 1976.

Refiere que fue detenido en una segunda oportunidad, en el año 1980, siendo llevado a una Comisaría en calle Portugal, donde habría sido golpeado de forma brutal toda la noche.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Dentro de las conclusiones del documento se indica que existiría un daño asociado al evento represivo que vivió, evidenciando un daño psicológico a causa de su experiencia de prisión y tortura.

Señala también que el trastorno por estrés postraumático con sintomatología depresiva de curso crónico se ha mantenido en el tiempo, lo que lleva a un trauma postraumático crónico.

Folio 22.

1.- Copia de documento consistente en un certificado de fecha 5 de diciembre de 2023, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el cual se consigna que Ricardo Santiago Rubilar Bascur se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I).

El documento cuenta con un timbre del referido Instituto, particularmente del área de Memoria, Archivo y Documentación, y una firma sobre el nombre de Marcela Cerda González, del área de Atención a la Ciudadanía.

Se incluye un extracto del referido listado de prisioneros políticos y torturados, particularmente de la página N° 525, que también cuenta con un timbre, donde se aprecia el nombre de Ricardo Santiago Rubilar Bascur, RUN. N° 7.490.711-3, junto al N° 21.683.

2.- Copia de carpeta de antecedentes correspondientes a Ricardo Santiago Rubilar Bascur, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 20 de noviembre de 2003.

En lo medular y atingente, se aprecia el siguiente detalle:

Declaración de los hechos, indicando una fecha de detención el 2 de septiembre de 1974, en el Regimiento Caballería Húsares de Angol, en la Región de la Araucanía.

Consigna un relato de similares características al de la demanda, pero agregando dentro de la violencia ejercida, golpes de electricidad y simulacros de fusilamiento. La fecha de liberación señalada en el documento es el 28 de marzo de 1975 (6 meses y 26 días).

Dentro de los antecedentes de dicha carpeta, se acompaña una declaración del sr. Rubilar Bascur, en la cual indica haber ingresado como militante de las Juventudes Socialistas en el año 1970, institución donde realizó distintas tareas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

que le fueron encomendadas, hasta el golpe de estado en el año 1973. El resto de su declaración es similar a los datos aportados en el libelo.

Se acompaña, además, un certificado emitido por Gendarmería de Chile - Centro de Detención Preventiva de Angol, de fecha 21 de octubre de 2002, en el cual el Alcaide de dicho centro certifica que el sr. Rubilar Bascur ingresó el día 17 de octubre de 1974, por orden de la Fiscalía Militar de Angol, por infracción a la Ley de Control de Armas, Ley N° 17.798, egresando del establecimiento con fecha 10 de diciembre de 1974, por orden de la Fiscalía Militar de Angol, permaneciendo recluso por un total de 55 días. El documento cuenta con timbre y firme del Alcaide, y un timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Finalmente, se incluye también en la carpeta una copia de la sentencia dictada en causa Rol N° 1.037-74, por el Consejo de Guerra de Angol (cuenta con timbre del Juzgado Militar de Valdivia), de fecha 14 de mayo de 1976.

En ella se condena al sr. Rubilar Bascur como autor del delito contemplado en el artículo 8 de la Ley 17.798, esto es, pertenecer a milicias privadas armadas, a la pena de 120 días de presidio menor en su grado mínimo, otorgándole el beneficio de la remisión condicional de la pena.

3.- Conjunto de (4) artículos relativos a la salud mental y Derechos Humanos, titulados: *“Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos”* de junio de 1989, emitido por el Equipo de Salud de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago; *“Algunos Problemas de Salud Mental Detectados por Equipo Psicológico-Psiquiátrico”* de julio de 1978; *“La Tortura Un Problema Médico – Equipo Salud Mental”* de marzo de 1983, emitido por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas; y, *“Trabajo Social, Una Experiencia Solidaria en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”*, de abril de 1980 (manuscrito 1987).

TERCERO: Que, la parte demandada, por su lado, rindió la siguiente prueba documental:

Folio 10.

1.- Copia de demanda presentada ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, autorizada por la sra. Secretaria el 7 de septiembre de 2005, figurando como demandantes: “Orlando Alexander Aguilar Gonzáles y otros”, y como demandado el “Estado de Chile”.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

En lo relevante para este caso, se observa que junto a otras personas, comparece Ricardo Santiago Rubilar Bascur, cédula de identidad N° 7.490.711-3, representado por un abogado, quien denuncia haber sido detenido el 3 de marzo de 1974 por agentes de la DINA, estando privado de libertad durante 250 días en el Regimiento de Caballería y Cárcel de Angol, siguiendo con arresto domiciliario por tres meses y control de firmas todos los viernes en el Regimiento durante un año y medio.

En el petitorio pide se condene al Estado de Chile al pago de \$100.000.000 a cada demandante, por concepto de indemnización por daño moral.

2.- Copia de la sentencia del 5° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-9405-2005, caratulada "*Aguilar Gonzales Or (...)/Fisco de Chile*", de fecha 13 de abril de 2010.

Se acoge la excepción de prescripción alegada por el Fisco de Chile y se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios.

3.- Copia de sentencia de confirmación de la ltma. Corte de Apelaciones, de fecha 2 de junio de 2011, IC. N° Civil 4240-2010.

4.- Copia de sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 2 de septiembre de 2011, relativa a la causa Rol N° 6407-2011, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, que rechazó el recurso de casación en el fondo, en relación a la causa Rol C-9405-2005 del 5° Juzgado Civil de Santiago, referida más arriba.

CUARTO: Que también consta el oficio ORD. DSGT N° 20384/2024 del Instituto de Previsión Social, de fecha 21 de febrero de 2024, que informa sobre "beneficios de reparación" pagados a Ricardo Santiago Rubilar Bascur.

Se informa que el demandante, por ser víctima de prisión política y tortura (Valech), recibe beneficios de reparación de las Leyes N°s 19.992 y 20.874.

Se especifica que Ricardo Santiago Rubilar Bascur ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.992 la suma de \$37.006.266; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; y, por concepto de aguinaldos la suma de \$659.680; siendo el total pagado \$38.665.946 y la pensión actual de \$242.262.

Se indica también que la demandante no ha recibido otros beneficios de reparación o previsionales en ese Instituto.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

QUINTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en el juicio, que solo se tendrán como base de una presunción judicial.

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

De esta manera, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, gozando de una verdadera presunción de autenticidad.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los Derechos Humanos de muchas personas durante el gobierno autoritario del Gral. A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático.

Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Valech.

SEXTO: Que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada alegada por la defensa fiscal, ciertamente que se configura la triple identidad descrita en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, se encuentra acreditado en estos autos que por sentencia definitiva de fecha 13 de abril de 2010, pronunciada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, se rechazó una demanda de indemnización de perjuicios, respecto de los causados a distintas víctimas de crímenes de lesa humanidad, acción patrimonial planteada en forma colectiva en contra del Fisco de Chile, figurando entre los demandantes Ricardo Santiago Rubilar Bascur, habiéndose tenido por prescrita la referida acción.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Por tanto, el interés manifestado por Ricardo Santiago Rubilar Bascur en la acción pretérita es el mismo que aparece vertido en la presente, el que se sustenta, en uno y otro caso, en unos mismos hechos, consistentes en las violaciones a los Derechos Humanos de que fue víctima.

Sin embargo, *acatando* la jurisprudencia reiterada la de la Excma. Corte Suprema en la materia, que se basa en lo que dispone el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación al deber de los Estados partes de respetar los Derechos Humanos y garantizar su ejercicio y goce, lo mismo que el deber de reparación, obligaciones que considera de exigibilidad inmediata, se rechazará la excepción, por estimarse que su preservación lo requiere para no hacer ilusoria su vigencia y respeto.

Para sustentar dicha mirada del asunto, se pasa a copiar los siguientes basamentos de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en el Rol N° 104.558-2020:

“QUINTO: Que, en relación a lo anterior, en el Caso Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que dicha obligación implica que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, “la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

SEXTO: Que, en este orden de ideas, de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

SÉPTIMO: Que es un principio general de derecho internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para su promulgación.

Que respecto a tales delitos y conforme al derecho internacional humanitario corresponde al Estado (de Chile), luego de investigar los hechos y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, sean directas o indirectas, además de garantizar la no reiteración de aquellos. Tales obligaciones tienen carácter internacional y tienen como fuente un conjunto de convenciones y el derecho consuetudinario.

OCTAVO: Que la importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos

Humanos.

NOVENO: Que todo lo que se lleva reflexionado evidencia el error de derecho en que incurre la sentencia en examen, pues hace primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, sobre la normativa internacional examinada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que demanda la víctima cuya existencia no ha sido controvertida. Ese yerro ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, pues impidió pronunciarse al tribunal sobre la demanda deducida contra el Fisco de Chile y, por consiguiente, establecer la responsabilidad extracontractual de éste por las acciones y omisiones de sus agentes establecidas en el fallo en examen.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

DÉCIMO: Que, en síntesis, tal como se ha sostenido recientemente por esta Corte en las sentencias Roles N° 36319-19 y N° 144348-22, no se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso dictados por esta propia Corte que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior”.

Es por todo lo anterior que, de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en la materia, *el derecho a una reparación integral termina imponiéndose*, coherente con la preeminencia de los derechos fundamentales conculcados, según se viene razonando.

SEPTIMO: Que zanjado lo anterior y en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que independiente de la acreditación de dichos beneficios, la defensa del actor no contravino que los haya recibido, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluido en la nómina del Informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos *“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”*, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del Derecho Internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del Derecho Interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

NOVENO: Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.



«RIT»

Foja: 1

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

DECIMO: Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que respecto del daño moral la Excma. Corte Suprema lo ha conceptualizado como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula”* (Rol N° 12.176-2017).

El presente caso es justamente uno de aquellos en que *“el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. En efecto, de acuerdo al relato consignado en el libelo pretensor, se trata del caso de un joven detenido injustificadamente en abril de 1974, cuando se presentó en el Regimiento de Caballería Húsares de la Muerte de Angol para cumplir con el servicio militar, siendo privado de su libertad por más de un año, hasta ser liberado en junio de 1975 (en la carpeta de antecedentes del INDH se indica que la detención se prolongó por alrededor de 7 meses, hasta el 28 de marzo de 1975).

Durante dicho periodo –primero en el Regimiento de Angol y después en la Cárcel Pública de Lonquimay- fue sometido a torturas brutales, en el contexto de interrogatorios que se desarrollaban en base a palizas, habiendo perdido piezas dentales (no queda claro cuántas ni cuáles) y una parte de la audición por los golpes que le fueron propinados.

Fue un tiempo de abusos, tormentos y desinformación, que han dejado una huella en esta persona, en línea con el concepto de tortura de la Convención



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) de 1985: “Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica” (arts. 2 y 3).

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en esta persona, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante, por los abusos que sufrió y el tiempo prolongado en que perdió su libertad.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente al demandante como víctima de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados y la afectación del demandante en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes y, particularmente, el tiempo que permaneció privado de libertad (cerca de un año), se determina en la suma única y total de \$60.000.000, que se deberá pagar más reajustes, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor por el periodo que media entre que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo e intereses corrientes desde la constitución en mora.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD

«RIT»

Foja: 1

UNDECIMO: Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, 177 y 342 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de cosa juzgada, reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar \$60.000.000 al demandante, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-20.904-2023

DICTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Abril de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKEMXNSYXDD